

Crisis en la Delegación Presidencial Provincial

La designación de Javier Fuchslocher como nuevo delegado presidencial en la provincia de Biobío pone fin a un caótico episodio que revela graves falencias en la conducción política del Gobierno. Lo que debería haber sido un proceso ordenado, se transformó en una muestra de improvisación y descriterio, que no solo afecta la institucionalidad, sino también la percepción ciudadana de quienes lideran.

La historia partió cuando la exdelegada Paulina Purrán renunció el 15 de noviembre para competir en las elecciones parlamentarias de 2025. Su partida dejó al organismo bajo la subrogancia de la seremi de Gobierno, Jacqueline Cárdenas, un esquema temporal que debía resolverse en semanas, pero que se extendió por más de un mes. El anuncio de Alejandro Jerez como sucesor, realizado el 17 de diciembre, prometía finalmente cerrar este vacío de liderazgo, pero duró menos de 24 horas.

El breve paso de Jerez por la Delegación Presidencial, marcado por su nombramiento y posterior renuncia dentro del mismo día, quedará en los anales de la política local como un bochorno. La falta de claridad respecto a las razones reales de su salida –más allá de la vaga explicación de “motivos personales”– solo alimenta especulaciones. Los rumores sobre su presunta vinculación con grupos violentistas en el Alto Biobío, basados en un informe de inteligencia, aunque desmentidos oficialmente, no hacen más que profundizar la incertidumbre y erosionar la confianza pública.

El Gobierno, al enfrentar esta situación, demostró una alarmante falta de preparación. La ausencia de una

planificación adecuada para la transición del cargo tras la salida de Purrán es inexcusable. Las instituciones no pueden depender de decisiones de último minuto, menos aún cuando se trata de un puesto estratégico en una región con desafíos significativos en seguridad, desarrollo rural y convivencia intercultural.

La elección de Javier Fuchslocher como reemplazo definitivo busca cerrar esta etapa de desorden. Su experiencia como profesor, exconvencional constituyente y ex candidato a consejero regional lo posiciona como un perfil con conocimiento del territorio y sus problemáticas. Sin embargo, su éxito dependerá de cómo logre reconstruir la credibilidad de una delegación dañada por los desaciertos recientes.

Este episodio es un reflejo de una crisis más profunda: la politización de los cargos públicos. El caso de Jerez, militante del Partido Socialista, ilustra cómo las designaciones parecen responder más a equilibrios partidarios que a una evaluación rigurosa de capacidades y antecedentes. Esta práctica no solo compromete la eficiencia del aparato estatal, sino que también perpetúa una desconfianza ciudadana hacia las autoridades.

El desafío ahora es doble. Por un lado, Fuchslocher deberá asumir el liderazgo de una delegación que enfrenta retos estructurales y sociales de alta complejidad, como la seguridad. Por otro, el Gobierno central debe aprender de este traspié y garantizar procesos de selección más serios, dejando de lado los intereses partidarios y priorizando el bienestar de los habitantes del territorio.